

Los cambios en España son un suicidio científico

Amaya Moro-Martín

España ya no tiene ministerio de ciencia. En los últimos días del año 2011, su nuevo gobierno transfirió ciencia al Ministerio de Economía y Competitividad, un ministerio que no es el adecuado para asumir esta responsabilidad. Ciencia no fue bien recibida y absorbió más de la mitad de los 1,083 millones de euros recortados a todo el ministerio. Esto manda una señal alarmante del sacrificio al que se enfrenta ciencia de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Es la primera vez que “ciencia” o “investigación” no aparecen en el nombre de ningún ministerio. No se trata sólo de un cambio simbólico: es la continuación de una tendencia deliberada que mina y minusvalora la importancia de la ciencia.

Las línea oficial es clara: la ciencia no es una prioridad en España. Es claro que estamos inmersos en una crisis económica y que hay que adoptar medidas de austeridad. Sin embargo, las medidas irracionales y draconianas del gobierno pueden causar un daño a largo plazo de la infraestructura científica y manda un mensaje contradictorio a otros países e inversores. Mientras que la retórica promete un cambio a un modelo productivo basado en el conocimiento, cada paso que se da va en la dirección opuesta. El resultado es una economía de conocimiento “prestado” que alberga pocos expertos locales.

Los problemas no comenzaron con el nuevo gobierno: la administración anterior trató de aprobar un estatuto del personal docente en las universidades públicas kafkiano que hubiera establecido un sistema de evaluación donde la investigación y la transferencia de conocimiento no tenían el peso adecuado. Este estatuto pretendía que los sindicatos pudiera negociar la promoción del personal docente, haciendo que la carrera académica fuera “más predecible y más igualitaria”. Hubiera sido la muerte de la meritocracia. El mismo estatuto hubiera incrementado la burocracia hasta el punto de colapsar cualquier sistema administrativo universitario.

“Las acciones irracionales y draconianas del gobierno causarán un daño a largo plazo de la infraestructura científica.”

El gobierno anterior también se opuso al intento de crear un sistema de contratación “tenure-track” para investigadores en universidades y organismos públicos de investigación, con el argumento de que un sistema “tenure-track” es inconstitucional porque el acceso a la función pública tiene que seguir un principio de “igualdad” de forma que los trabajos estables no pueden ser adjudicados directamente a los investigadores que hayan superado el periodo de prueba en el “tenure-track”. Esto es una consecuencia de la visión miope de que todos los investigadores en el sector público tiene que ser funcionarios, a pesar de que el sistema funcional es inapropiado para actividades de investigación.

España alardea de tener un sistema equivalente al “tenure-track”: el programa Ramón y Cajal. Lanzado en el 2001, este es el único programa a nivel nacional que ha podido atraer y retener a científicos altamente cualificados de España y de otros países. Sin embargo, los drásticos recortes en empleo público durante los últimos tres años y la anunciada tasa de reposición cero para este año van a acabar con este primer intento de “tenure-track”. Las perspectivas son tan desalentadoras que, a pesar de su tremendo interés en regresar a España, algunos de mis colegas españoles en los Estados Unidos están empezando a rechazar contratos Ramón y Cajal.

La congelación en el empleo público en investigación es suicida. Los investigadores que se retiren no van a ser sustituidos. España tiene una industria científica y tecnológica muy limitada para poder absorber a estos trabajadores tan bien formados, de forma que investigadores de hasta más de 40 años no van a tener otro remedio que emigrar para continuar con su carrera. El país se enfrenta a una fuga de cerebros multigeneracional, con la correspondiente pérdida de innovación, inspiración y credibilidad. De adoptarse esta medida el país tardaría décadas en recuperarse.

El nuevo gobierno está pisoteando las esperanzas que los investigadores españoles tenían para el futuro. La legislación pendiente podría mejorar la situación pero el gobierno ha cerrado, abruptamente y sin explicación, dos comisiones de ciencia, una en el Senado y otra en el Congreso, que hubieran sido responsables de llevar acabo con celeridad las acciones legislativas necesarias.

Estas acciones incluyen la ley de mecenazgo para permitir la financiación privada de universidades e instituciones de investigación, el desarrollo de la nueva Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología y la creación de la Agencia de Investigación con un presupuesto plurianual. Necesitamos esta agencia urgentemente porque las drásticas fluctuaciones a las que se somete al sistema de investigación año a año hacen la planificación a medio y largo plazo imposible. La estrategia es crucial para coordinar las cada vez más anárquicas 18 diferentes políticas científicas (17 de cada autonomía y una del gobierno central), y para introducir la investigación orientada “top-down” que pueda afrontar grandes retos científicos de interés nacional.

España necesita incrementar inversión en I+D (ahora un 1.39% del PIB) para alcanzar la media europea (2%) y acercarse al objetivo del 3% establecido para el 2010 por la Comisión Europea en la Estrategia de Lisboa.

La situación en España se resume en el cartel publicitario de una de las últimas superproducciones de Hollywood: “Sin plan. Sin apoyo. Sin salida. Misión Imposible. Protocolo Fantasma.” La ciencia española no se puede permitir más protocolos fantasma. Sin la estrategia propuesta estaremos sin plan y sin una agencia de investigación bien financiada y con independencia política estaremos sin apoyo. El resultado deja a la investigación en España como una misión imposible.

Afiliación: Amaya Moro-Martín es investigadora del programa Ramón y Cajal en el CSIC.



Spanish changes are scientific suicide

If research continues to be sidelined, Spain will be left with little domestic expertise, warns Amaya Moro-Martín.

Spain no longer has a ministry of science. In the last days of 2011, its new government transferred national science policy to the Ministry of Economy and Competitiveness, a duty for which this ministry seems most unsuited. Science was an unwelcome addition that absorbed more than half of the €1,083-million (US\$1,438-million) budget cut imposed on the ministry. This sends an alarming signal of the sacrifices that science may face when the government releases its budget for 2012 next month.

This is the first time that neither ‘science’ nor ‘research’ have featured in the name of any top Spanish government department. It is not just a symbolic shift: it continues our country’s trend of deliberately undermining and playing down the importance of science.

The official line is clear: science is not a priority in Spain. Of course, we are immersed in an economic crisis and austerity measures are needed. However, the government’s irrational and draconian actions will cause long-term damage to the scientific infrastructure and send contradictory messages to other countries and investors. Although its rhetoric promises a shift to a knowledge-based economy, every step it takes is in the opposite direction. The results will be a borrowed-knowledge economy with little domestic know-how.

The problems did not start with the new government: the previous administration attempted to pass a Kafkaesque by-law for public universities that would have created a merit-evaluation system that diminished the weight assigned to research and technology transfer. The by-law stated that trade unions would negotiate the criteria for faculty promotion, making academic careers “more predictable and more egalitarian”. It would have been the death of meritocracy. The same by-law would also have ballooned bureaucracy to such a level that it would have threatened to swamp any university administration.

The previous government also opposed attempts to create a genuine tenure-track system for researchers in universities and national laboratories, on the grounds that tenure track is unconstitutional because access to civil service should be “egalitarian” so tenured jobs should not be targeted to tenure-track researchers. This is a consequence of the narrow-minded thought that all researchers in the public sector should be civil servants, but civil service is unsuited to research activities.

Spain likes to boast that it has an equivalent to tenure track: the Ramón y Cajal programme. Launched in 2001, this is the only nationwide programme that has managed to attract and retain highly qualified researchers from Spain and abroad. However, drastic cuts in hiring over the past three years and a hiring freeze announced this year will kill this first

attempt at a tenure-track programme. The prospects are so grim that despite being eager to return to Spain, some of my Spanish colleagues in the United States are rejecting Ramón y Cajal positions.

The hiring freeze is suicidal. Researchers who retire will no longer be replaced. Unlike many of its neighbours, Spain has a very limited science and technology industry in which to absorb highly qualified workers, so scientists aged 20–40 years will have no choice but to leave if they want to further their career. The country will therefore face a multigenerational brain drain, with corresponding losses in innovation, inspiration and credibility. The damage from this decision will take decades to reverse.

The new government is now effectively trampling on the best hope that Spanish researchers had for the future. Legislation in the pipeline could have improved the situation, but the government has, abruptly and without explanation, closed the two political science commissions — one in the Senate and one in the Congress — that would have been responsible for steering through this legislation.

The legislation includes moves to allow universities and research centres to be funded privately, to develop a new science and technology strategy and to create a proper national research agency with a multi-year budget. We urgently need such a system in Spain, where severe and unpredictable fluctuations in year-to-year funding make medium- to long-term planning impossible. The strategy is crucial if Spain is to coordinate its increasingly anarchic 18 sets of science policies — laid out simultaneously by the 17 regional governments and the central government — and to introduce a smarter, top-down, approach to tackling national problems.

Spain must bring its science and technology investment (currently 1.39% of gross domestic product) in line with European standards (2%) and closer to the 3% goal set by the European Council Lisbon Strategy for 2010. It also needs a science council, similar to the German *Wissenschaftsrat*, constituted mainly of scientists who have been elected by the scientific community to take the lead in delivering the national science and technology strategy.

Spain’s situation is summed up by a poster for a recent Hollywood blockbuster: “No plan. No backup. No choice. Mission: Impossible. Ghost Protocol.” Spanish science cannot afford ghost protocols. Without the proposed strategy there is no plan, and without a well-funded and non-political national research funding agency, there is no backup. The results leave research in Spain with a mission impossible. ■

Amaya Moro-Martín is a Ramón y Cajal Fellow at the Spanish National Research Council in Madrid.
e-mail: amaya@cab.inta-csic.es

THE GOVERNMENT’S
IRRATIONAL
AND DRACONIAN
ACTIONS WILL CAUSE
LONG-TERM
DAMAGE
TO THE SCIENTIFIC
INFRASTRUCTURE.

➔ NATURE.COM
Discuss this article
online at:
go.nature.com/cgua3